

cal interino concluye pidiendo que la Sala se sirva aprobar las siguientes proposiciones:

1º Se dá por revisada esta causa.

2º Que informe el Promotor del Tribunal de Circuito de Guadalajara, sobre los motivos que haya tenido para haberse conformado con la sentencia de 2º instancia, siendo así que sus pedimentos no están conformes con lo fallado en esa misma sentencia.

México, Diciembre 8 de 1874.—*Velazquez.*

Auto de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 26 de 1875.

Como pide el C. Fiscal.—*M. Auzá.*—*Juan J. de la Garza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia México, Febrero 12 de 1875.—*Alfo Gomez Eguarte.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México por Ricardo Cubells contra los procedimientos del C. Gobernador del Distrito que lo ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte.

Pedimento del C. promotor fiscal del Juzgado de Distrito.

C. Juez 2º de Distrito:

El Promotor fiscal dice: Que en 17 de Febrero del presente año se pidió al C. Gobernador del Distrito la causa que instruyó á D. Ricardo Cubells por el robo ejecutado en la casa de D. José Inés Salvatierra en la noche del 30 de Abril del año anterior

próximo pasado de 1873, recibiendo-se prueba el presente recurso de amparo interpuesto por el expresado Cubells.

Remitida y examinada la causa por el que suscribe, y sin entrar en la apreciación de la sustanciación que lo dio al C. Gobernador del Distrito, se contraerá únicamente al punto de competencia de esta autoridad, para atraer y abocarse el conocimiento del hecho; y para esto basta considerar si por la naturaleza del delito, materia de la causa, y sus circunstancias, de cuyo delito se supuso cómplice y participe en parte de lo robado á Cubells, está comprendido en la ley especial y excepcional de los plagiaros y robos con violencia y asalto, únicos que confieren á la autoridad política, jurisdicción para conocer de tales causas, y sentenciar á los reos de tales delitos.

Del exámen del hecho resulta, que los ladrones se introdujeron en la casa de D. José Inés Salvatierra, con simulación y artificio, y esto medio, está muy distante de equipararse á un ataque con asalto y con violencia y en cuadrilla, que son los requisitos ó circunstancias que dan al hecho la especialidad, para poder juzgar por la autoridad política.

Por los certificados que ha presentado el entendido defensor de D. Ricardo Cubells, se ve que la jurisprudencia de los jueces del ramo criminal confirmada por el Tribunal Superior del Distrito, los robos que se verifican en poblado, introduciéndose en las casas de una manera furtiva en mas ó menos número los ladrones, no están en el caso de la ley especial que sobre plagios y robos con asalto se ha sancionado. Dicha ley y sus referentes, se contraen al asalto á poblaciones, á mano armada con objeto de robar, herir ó matar á los moradores del pueblo, introduciéndose en las casas para pillarlas y cometer otros excesos. Esta jurisprudencia es conforme á los principios de derecho; es conforme á la enseñanza de los intérpretes, que de siglos atrás han tratado de la materia, aconsejando á los jueces que deben

conformar sus juicios mas á la equidad que al rigor de la ley, cuando las circunstancias lo requieren, y cuando la singularidad de éstas los dé lugar á creer que la ley no ha sido expedida para la especie que se presenta, porque cuando su disposicion es precisa y no puede admitir interpretacion que la destruya enteramente, el juez debe abstenerse.

Por los apuntes que he tomado de la causa, me he convencido de que el robo perpetrado en la casa del Sr. Salvatierra, no puede legalmente compendiarse en la categoria de aquellos que la ley ha sugetado á una jurisdiccion especial, que como tal debe circunscribirse en su ejercicio, á aquellos casos, en los que no pueda haber ni la menor duda, de que están comprendidos en la ley especial y de circunstancias.

Dice la de Mayo de 1872 que es la vigente: «Para los efectos de esta ley se entienden por saltadores, el que ó los que en los caminos ó lugares despoblados, asalten al individuo con violencia, con objeto de robarlo, herirlo ó matarlo; y los que en gavilla atacasen en poblado con objeto de robar, herir ó matar á los habitantes.»

Pues bien: la introduccion furtiva que se hace en una casa por algunos malhechores con objeto de robar lo que en ella se encuentra, no es, ni puede ser asalto con violencia, que es la circunstancia especial é indispensable, para someter el conocimiento del hecho á la jurisdiccion especial de la autoridad política. Esto solo basta para conceder en el caso presente, á Cubells, el amparo que solicita, porque el robo cometido, y en el que se le supone cómplice y participe, no está comprendido en dicha ley de Mayo, y como consecuencia forzosa, el Gobernador del Distrito fué incompetente para juzgarlo, y la sentencia que pronunció es nula, segun el principio universal, de que para la validez de una sentencia, es preciso que el juez sea competente.

El quejoso en su ocurno hace mérito de

otras violaciones de garantías constitucionales bien analizadas, y exactamente aplicadas por su defensor, al presente caso. Al promotor que suscriba, le basta la de incompetencia, y las que citará como referentes, para pedir al juzgado se sirva declarar:

1º Que la Justicia de la Nacion proteja y ampara á Ricardo Cubells contra los procedimientos del C. Gobernador del Distrito, en la causa que se instruyó por el robo ejecutado en la casa de D. José Inés Salvatierra en las primeras horas de la noche del día 30 de Abril del año próximo pasado de 1873, por falta de competencia para juzgar y sentenciar en tal causa, violando con tal procedimiento en la persona de Cubells, las garantías constitucionales otorgadas á los ciudadanos y habitantes en la primera parte del art. 13, en la 2ª del 14 y en la 1ª del 16 de dicha Constitucion.

2º Que si el juzgado decreta el amparo, se sirva igualmente librar sus órdenes á quien corresponda ó recavarlas de quien deba librarlas, á fin de que Cubells sea trasladado del Castillo de San Juan de Ulua, donde se halla, á esta Capital, para que sea juzgado por la jurisdiccion ordinaria del ramo criminal, como única competente en el presente caso.

México, Diciembre 8 de 1874.—*Beltran.*

Es copia. México, Enero 4 de 1875.—*Fernando Zamora.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Octubre 30 de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Cubells, representado por sus defensores CC. Lics. Amado Osio y Luis G. de la Sierra, contra los procedimientos del C. Gobernador del Distrito en la causa que le instruyó por el delito de robo ejecutado en la casa de D. José Inés Salvatierra el día 30 de Abril del año próximo pasado de 1873, en virtud de reputar violadas en su persona con dichos

procedimientos, las garantías que otorga la Constitución General de la República en sus arts. 18, 19, 20, 21 y 23; visto el escrito de queja; el informe rendido por el Gobernador del Distrito y pedimento fiscal; la prueba rendida por el quejoso; lo alegado por las partes, la citación para sentencia y cuanto mas de autos consta y tener presente convino, y considerando respecto de la garantía consignada en el art. 18 de la Constitución: que en virtud de ella, ningún hombre puede ser juzgado en la República por Tribunales especiales, y la prohibición abraza, ya el caso de juzgar por Tribunales criados ad hoc con posterioridad á la comisión de un delito, ya el de juzgarse por autoridad sin jurisdicción otorgada por la ley; que respecto del primer punto, no es éste el caso, supuesta la existencia de la de 23 de Mayo de 1872 en la época en que el delito se cometió, restando solo acerca del segundo examinar si en virtud de dicha ley conoció de la causa con jurisdicción el C. Gobernador.

Considerando: que el texto de la citada ley, dice:

«Para los efectos de ésta ley, se entienden por salteadores, el que, ó los que en los caminos ó lugares despoblados, asaltan al individuo con violencia con objeto de robarlo, herirlo, ó matarlo, y los que en gavilla atacaren en poblado con objeto de robar, herir ó matar á los habitantes,» y que Cubella fué juzgado por el Gobernador del Distrito, por haber formado parte de los malhechores que verificaron el robo mencionado, ó lo que es lo mismo, por formar parte de una gavilla que robó en poblado: que la repetida ley se refiere en su última parte inserta, á los malhechores que reunidos con ese fin, roben, maten ó hieran á los habitantes de poblaciones indefensas, y nunca en las que, como en ésta Capital, puedan ser reprimidos sus excesos, pues para ello había sido necesario reformar, mediante los requisitos legalmente indispensables, el art. 23 de la Constitución, no debiendo

reputarse lo mismo con relación á las poblaciones cortas, pues el legislador solo interpretó dicho artículo Constitucional, y con justicia, equiparando á las reducidas poblaciones con lugares despoblados, en atención á la carencia de elementos para evitar los delitos y defender á sus habitantes.

Considerando: que de autos consta probada la práctica de que los juzgados y tribunales del fuero común, conocen de las causas instruidas contra malhechores que en cuadrilla roban en poblado, (fs. 25 á la 30,) y de ellas, y muy especialmente de la causa original remitida por el C. Gobernador del Distrito, aparece que el quejoso no se halla comprendido en los casos determinados por la ley citada de 23 de Mayo de 1872.

Considerando: que aun en el supuesto de que pudiera caber alguna duda acerca de la interpretación de la referida ley de 23 de Mayo de 1872, en la parte que trata del delito de robo ejecutado en cuadrilla y en poblado; es un principio de derecho que lo odioso debe restringirse y lo favorable ampliarse, y la pena de muerte es odiosa, y el juicio por tribunales especiales es odioso.

Considerando: que con relación á la garantía consignada en el art. 19, que dispone que ninguna detención pueda exceder del término de setenta y dos horas, sin que medie auto de formal prisión, y que Cubella se encuentra preso desde la fecha de su aprehensión á la presente, en virtud de los procedimientos del C. Gobernador del Distrito en la causa que le instruyó, y que según queda expreso dicha autoridad obró sin jurisdicción, toda vez que no le fué otorgada por la ley, de donde toda jurisdicción emana.

Considerando: relativamente á la garantía que otorga la Constitución General, en su art. 20 que determina las defensas de que debe gozar todo reo en las causas que se les instruyen: que su-

puesta la incompetencia del C. Gobernador del Distrito para enjuiciar á Cubells por el delito relacionado, las diligencias practicadas por él, legalmente son nulas. Por tales consideraciones, atento lo pedido por el C. Promotor fiscal y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, y el art. de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara:

Que la Justicia de la Unión ampara y protege á Ricardo Cubells, contra los procedimientos del C. Gobernador del Distrito, en la causa que le instruyó por el delito de robo ejecutado en la casa de Don José Inés Salvatierra, el día 30 de Abril del año próximo pasado, por violarse con ello en su persona, las garantías que otorga la Constitución en sus arts. 13, 19, 21 y 23.

Ilágase saber, publíquese y previa citación fiscal, elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revisión.

Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito, Luc. José María Canalizo. Doy fé.—José María Canalizo.—Fernando Zamora, secretario.

Es copia. México, Enero 4 de 1875.—Fernando Zamora, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Enero 27 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de esta Capital por Ricardo Cubells, contra los procedimientos del C. Gobernador del Distrito que lo ha juzgado y sentenciado á sufrir la pena de muerte por el delito de robo en cuadrilla, perpetrado en la casa núm. 1. de la Estampa de la Merced, habitación de D. José Inés Salvatierra, aplicándole la ley contra salteadores y plagiarios, de 23 de Mayo de 1872; con cuyos procedimientos, según manifiesta el quejoso, se han vulnerado en su persona, las garantías que consignan los arts. 13, 20, 21, y 23 de la Constitución de la República, y

Considerando: que la violación de las garantías constitucionales se hace consistir en el hecho de haberse aplicado al quejoso una ley que suspende en el goce de ellas, exclusivamente á los autores de los delitos que la misma ley enumera, entre los cuales no está comprendido Cubells por causa del robo que se le ha hecho cargo, en razón de que la fracción 3ª de la referida ley de 23 de Mayo, en la parte conducente que declara salteadores á los que en gavilla atacaren en poblado con objeto de robar, herir ó matar á los habitantes, debe entenderse que se refiere al ataque de una población y no al robo de una sola casa.

Considerando: que es de todo punto inadmisibles esta interpretación, pues las palabras "*ataque en poblado*" son aplicables tanto á una sola casa, como á una población en conjunto.

Considerando: que en consecuencia estando suspensas para Cubells en la causa que se le siguió por el robo de la habitación de D. José Inés Salvatierra, las garantías de que tratan los arts. 13, 19, 20 y 21 de la Constitución, no procede el amparo de la Justicia federal por violación de esas mismas garantías; así como tampoco por la consignada en el art. 23 del mismo Código, que se refiere á la abolición de la pena de muerte, en razón de que el quejoso ha sido indultado de esta pena que le fué conmutada en diez años de prisión.

Con estas consideraciones y con fundamentos de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta:

1º Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez 2º de Distrito, en 30 de Diciembre del año pasado, que declaró haber lugar al amparo federal.

2º La Justicia de la Unión no ampara ni protege á Ricardo Cubells, contra los procedimientos del Gobernador del Distrito, que han dado origen á este recurso.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de

esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese; y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias-M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—L. Velazquez M. Zivala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar*, Secretario.

Es copia que certifico México, Febrero 24 de 1875.—*Enrique Landa*.

AMPARO

Interpuesto ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por el C. Pascual Carballada, contra el Ministro de la Guerra, por violacion de garantías.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

Ciudadano Juez 2º de Distrito:

El promotor fiscal dice: Que sublevado el ex-convento de Jesus Maria por orden suprema en diversas fracciones, y aprobados que fueron los planos parentales de cada una de las fracciones, se adjudicó el lote núm. 1 al C. Pascual Carballada, como consta de la escritura de adjudicacion fecha 23 de Diciembre de 1861, que en copia autorizada corre en este expediente de fojas 8 á la 17.

Contrajo el adjudicatario la obligacion de reconocer el valor respectivo de su posesion, al seis por ciento anual, aplicándose este rédito al sostenimiento del hospital de San Pablo, hoy llamado de sangre.

Todos los actos referidos fueron desde su origen practicados con total arreglo á las leyes, y en virtud de ellos, adquirió dere-

chos y dominio pleno en ese lote, el referido adjudicatario.

Así se hallaba, hasta el 29 de Diciembre de 1871, que el supremo gobierno, investido por la ley del dia 2 del mismo mes y año, de facultades extraordinarias, destinó el lote núm. 1 referido para cuartel, alojándose en él, uno de los batallones del ejército.

Tal ocupacion que aun subsiste, es la que ha dado origen al presente recurso de amparo, interpuesto por el quejoso, y trayendo en apoyo de su intercesion las prevenciones expresas terminantes, y que no admiten interpretacion, de los arts. 16 y 27 de la Constitucion, que aseguran á los ciudadanos y habitantes de la República, el 1º de los citados, que nadie puede ser molestado en su persona y posesiones, si no es de la manera que en dicho artículo se dispone; y el 2º, que nadie puede ser privado de su propiedad, si no es por causa de utilidad pública y previa indemnizacion.

La excepcion que se alega por la autoridad responsable del acto que se reclama, se funda en la ley de 2 de Diciembre de 1871, de facultades extraordinarias. El texto de esta ley dice: "La propiedad de las personas puede ser ocupada sin su consentimiento, por causa de utilidad pública, en caso de urgente necesidad, y con la competente indemnizacion, previa ó posterior, que se hará efectiva de preferencia en este segundo caso."

Muy explícita fué la autorizacion que dió la ley al supremo gobierno; pero no menos lo fué la condicion, y *de toda preferencia*, que debia llenar al hacer uso de esa facultad.

Seria por demas enojoso y molesto, el análisis legal del acto reclamado: es clara, es evidente la violacion de las garantías constitucionales que se han citado, y que si bien es disculpable la autoridad que violó esas garantías, atendidas las graves circunstancias que determinaron al legislador, á investir al supremo Poder Ejecutivo con tales facultades, si estas se extralimitaron, no